

NOTAS INTRODUCTORIAS PARA UNA ESTRATEGIA DE VIVIENDA CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS



NOTAS INTRODUCTORIAS PARA
UNA **ESTRATEGIA DE VIVIENDA**
CON ENFOQUE DE DERECHOS
HUMANOS

Créditos

European Anti-Poverty Network (EAPN) es una Plataforma Europea de Entidades Sociales que trabajan y luchan contra la Pobreza y la Exclusión Social en los países miembros de la Unión Europea. La EAPN busca permitir que aquellas personas que sufren la pobreza y la exclusión social puedan ejercer sus derechos y deberes, así como romper con su aislamiento y situación, y tiene como objetivo principal situar ambas cuestiones en el centro de los debates políticos de la Unión Europea.

En España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) es una organización horizontal, plural e independiente que trabaja para trasladar este objetivo a la realidad española y por incidir en las políticas públicas, tanto a nivel europeo como estatal, autonómico y local. Actualmente está compuesta por 19 redes autonómicas y 22 entidades de ámbito estatal, todas ellas de carácter no lucrativo y con un componente común: la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En total, EAPN-ES engloba a más de ocho mil entidades sociales en todo el Estado.

Título: Notas introductorias para una Estrategia de Vivienda con enfoque de derechos humanos. Actualización 2024.

Edita: EAPN España.

Calle Melquiades Biencinto, 7 - 2ª Planta.

28053 Madrid

eapn@eapn.es www.eapn.es

Coordinación: EAPN-ES (GT de Vivienda).

Elaborado por: EAPN-ES.

Fecha: diciembre 2024.

Financiado por:



Esta publicación ha recibido el apoyo económico del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para la PROMOCIÓN DE INICIATIVAS PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL, RD 1159/2024 de 19 de noviembre. La información contenida en la publicación no refleja la posición oficial del Ministerio.

Diseño: www.pontella.es

© de la Edición: EAPN España



Se permite la reproducción total o parcial de este documento siempre y cuando se citen las fuentes, respetándose el contenido tal como está editado sin ningún tipo de tergiversación o cambio.

Índice

INTRODUCCIÓN	7
1. FOTO INSTANTÁNEA.....	8
2. ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.....	11
3. RECOMENDACIONES DE NACIONES UNIDAS HECHAS A ESPAÑA EN REFERENCIA A POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DEL DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA	13
4. ESTRATEGIA DE VIVIENDA BASADA EN LOS DERECHOS HUMANOS, ¿DESDE QUÉ PARÁMETROS?.....	15
5. DIEZ PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA UNA ESTRATEGIA DE VIVIENDA BASADA EN DERECHOS HUMANOS	16

NOTAS INTRODUTORIAS PARA UNA ESTRATEGIA DE VIVIENDA CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

Basada en el Informe **“Aplicación de estrategias de vivienda eficaces y basadas en Derechos”** de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada¹.

1 Complementar con FOESSA 2018 “El sistema público de vivienda en el Estado español. Sin estrategia ni fundamentación en los Derechos humanos” <https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/05/4.13.pdf>

INTRODUCCIÓN

Son variados los problemas asociados a la vivienda y la exclusión residencial que existen en España, siendo ahora además uno de los 3 principales problemas que más afectan de manera personal a la población según el barómetro mensual del CIS publicado en junio de 2024 (un 83,6% de los españoles cree que no todos tienen las mismas oportunidades para acceder a una vivienda). Pero, además, existen problemáticas de vivienda estructurales, que necesitan de medidas directas y sostenibles que ofrezcan soluciones definitivas.

Por ello, es preciso realizar un abordaje de estos problemas unificado, que coordine distintas políticas y administraciones con competencias compartidas o exclusivas, y adecuadamente financiado, que consiga la garantía del acceso a una vivienda digna como un derecho, tal y como está contemplado en nuestra **Constitución** en su artículo 47 y en la **Ley por el derecho a la vivienda: una Estrategia de actuación para garantizar una vivienda adecuada con un enfoque de derechos humanos**.

Este documento nace con la finalidad de dar pasos en la garantía del derecho humano a una vivienda adecuada, contemplado en Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde un enfoque integral que no solo tenga como referencia la construcción física de una residencia, sino también la interdependencia de los derechos humanos, implicando que la no realización de este derecho conlleva vulneraciones de otros derechos fundamentales, esenciales y, por ello, catalogados también como derechos humanos.

➡ Para ese disfrute transversal, compartido e interrelacionado de los derechos humanos en torno al acceso a una vivienda digna y adecuada y a un entorno limpio, inclusivo, sustentable y asequible, es preciso **diseñar mecanismos que tengan como base los marcos políticos vigentes** y avanzar en su **implementación coordinada y complementaria**, asumiendo los poderes públicos las **responsabilidades en cada uno de los niveles de la administración del estado**, como garantes de estos mismos derechos.

Se plantean por tanto a continuación los enfoques, marcos y mandatos que deben tenerse en cuenta para el diseño de una Estrategia de Vivienda en España con enfoque de derechos humanos.

1/

FOTO INSTANTÁNEA²

- Vivienda como **producto de consumo/inversión** económica. Incremento progresivo de los precios del alquiler. Según el Barómetro del Alquiler en el segundo trimestre de 2024 el precio medio del alquiler era de 1.106€
- La vivienda funciona como **un aspirador de rentas**. El gasto medio mensual en hipoteca y alquiler se incrementó hasta 604€, la cifra más elevada desde 2008. Además, en 2023 una **de cada tres personas pobres (31,7%) destinaban más del 40%** de sus ingresos al pago de la vivienda.
- **El alquiler crece más que los salarios**. desde 2014 el precio medio del alquiler ha crecido de forma constante e ininterrumpida y en 2023 era un 32,3 % superior a los de entonces, incrementándose cerca de tres veces más de lo que lo han hecho las rentas reales por persona³.
- **Los hogares vulnerables se concentran en el alquiler de mercado**. Las personas que viven en España presentan, entre el conjunto de economías de la UE-27, la mayor proporción de personas en el mercado del alquiler que se encuentran en una situación de pobreza o de exclusión social. En concreto, en 2022 se encontraban en esta situación un 45% de los hogares españoles que residían en una vivienda alquilada⁴.
- Falta de parque público de **vivienda social**. **El parque público de vivienda social en España (2,5%) se encuentra a más de 6 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea (9,3%)**.
- Falta de parque público **de vivienda protegida en alquiler permanente**.
- Falta de **vivienda asequible** (pública y privada).⁵
- **Falta de vivienda asequible incentivada**. Principalmente de los modelos sin ánimo de lucro impulsados por entidades sociales del tercer sector especializadas en vivienda, frente a otros agentes privados.
- La **exclusión residencial en España**. En 2023 casi un tercio (29,5%) de los hogares en España estaba en situación de exclusión residencial, es decir más de 5,5 millones de hogares, y un 17,6% en exclusión residencial severa, lo que significa más de 3 millones de hogares.⁶

2 EAPN-España (2020) “El Derecho a una vivienda adecuada y digna” Diagnóstico pp. 6-22 Recuperado de: <https://www.eapn.es/publicaciones/378/el-derecho-a-una-vivienda-adecuada-y-digna>.

3 Informe vivienda y pobreza 2024 de EAPN-ES: <https://www.eapn.es/estadodepobreza/capitulos-2024.php>

4 Informe vivienda y pobreza 2024 de EAPN-ES: <https://www.eapn.es/estadodepobreza/capitulos-2024.php>

5 <https://publicaciones.transportes.gob.es/observatorio-de-vivienda-y-suelo-boletin-especial-vivienda-social-2020> publicado por el Observatorio de Vivienda y Suelo en 2020.

6 Informe Prevención y atención de la exclusión residencial de Provivienda: <https://www.provivienda.org/datos-vivienda-espana/>

- El racismo con factor agravante de la exclusión residencial.⁷
- **Desalojos forzados** sin alojamiento alternativo. Citando los datos que publica el Consejo General del Poder Judicial, el número total de desahucios practicados fue de 26.659 en 2023. De los cuales, el mayor número se producen derivados de no pagar el alquiler, exactamente 19.676, mientras que 5.260 se produjeron por ejecuciones hipotecarias y los 1.723 restantes por otras causas.
- Persistencia de **alojamientos que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, no son viviendas dignas**. Las viviendas de la población en pobreza adolecen de más deficiencias que las del resto: un 31,8 % de las personas pobres viven en hogares con problemas de goteras y humedades (frente al 20,7 % del resto de población), el 26,1 % en viviendas en las que sufren problemas de ruidos (frente al 23,0 % del resto), el 14,5 % tienen problemas de espacio (frente al 5,9 % del resto), el 12,5 % conviven con problemas de suciedad y contaminación ambiental (frente al 10,2 %) y el 11,3 % en hogares con escasa luz natural (frente al 7,7 %).
- La elevada tasa de **pobreza energética**. Aumento de las personas que **no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno** (20,7%) un crecimiento de 3,6 puntos y que se ha prácticamente triplicado en los últimos cuatro años según el XIV Informe del Estado de la Pobreza de EAPN-ES.
- Un 9,2% de la población en España destina más del 40% de sus ingresos para cubrir los costos de vivienda. Además, el **60% de los hogares presenta algún problema relacionado con la vivienda** y 1 de cada 3 hogares se encuentra en exclusión residencial (PROVIVIENDA, 2023)⁸
- En 2023 se registraron **28.552 se encontraban en situación de sinhogarismo** ⁹
- La **pendiente erradicación del chabolismo**. En España existen unos doscientos setenta asentamientos chabolistas repartidos en la mayor parte de las comunidades autónomas, en las que viven miles de personas, entre ellas, más de 11.000 personas gitanas y una buena parte de ellas son niños y niñas¹⁰ así como aquellos que afectan a la población de origen migrante vinculada, sobre todo, al trabajo agrícola.¹¹
- Dificultad acceso y mantenimiento de suministros (**electricidad, internet, agua, gas...**)
- **Falta de accesibilidad en y a las viviendas. Más de 100.000 personas no pueden salir de sus casas y 1,8 millones necesitan ayudas de terceros** ¹²

7 Informe de Provivienda y Andalucía Acoge. https://www.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/Resumen_ejecutivo_Discriminacion_racial_2022_acces.pdf

8 PROVIVIENDA (2023) "La casa auestas. La vivienda en datos en 2023" Disponible en: <https://provivienda.org/observatorio/datos-vivienda-2023/>

9 Personas sintecho y sin vivienda; datos EPSH, INE, 2022.

10 Fundación Secretariado Gitano y Fundación ISEAK (2023). Estudio sobre el perfil y la situación de las personas en los asentamientos chabolistas y de infravivienda en España. Madrid.

11 Info_Asnt_H.pdf https://acoge.org/wp-content/uploads/2023/03/Informe_asentamientos2022_web.pdf

12 Estudio *Movilidad reducida y accesibilidad en edificios de viviendas* (2019) del Observatorio de Accesibilidad.

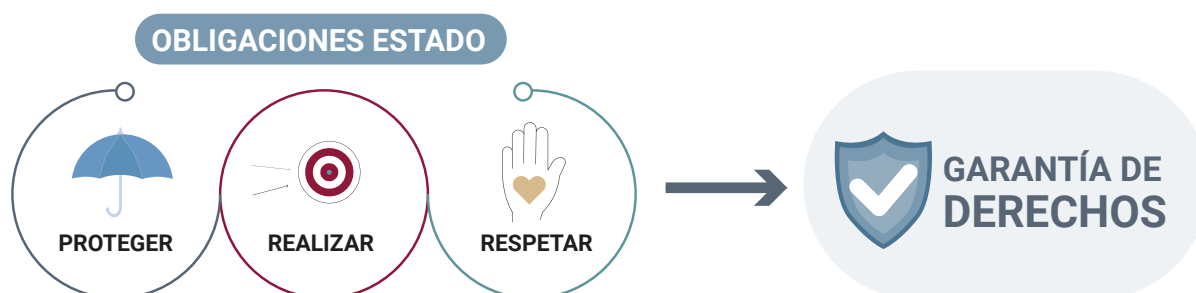
- El 4% de las personas con movilidad reducida no salen nunca de casa. Un porcentaje que aumenta hasta el 42% entre las personas que se pasan muchos días sin salir de casa, siendo uno de los principales motivos la falta de adaptación del edificio. En este sentido, el 33% considera que si su edificio estuviera más adaptado saldría más de casa, un porcentaje que se duplica en edificios que no tienen ascensor.
- Las **dificultades de las personas jóvenes para emanciparse**. Solo un 17% de las personas jóvenes residentes en España estaba emancipada en 2023 y la edad media de emancipación se sitúa en los 30,4 años. En cuatro comunidades autónomas (Canarias, Catalunya, la Comunidad de Madrid e Illes Balears) el importe del alquiler ya era superior al 100 % del salario de una persona joven que trabajase en esos territorios, según el Observatorio de la Emancipación.
- **Deterioro de barrios**, edificaciones e infraestructuras de los mismos. En España casi 9 millones de viviendas en las que residen más de 22 millones de personas tienen problemas de asilamiento y conservación.¹³
- El **elevado parque de vivienda vacía**. Un 14,4% de las viviendas están vacías lo que supone 3,8 millones de viviendas vacías en todo el territorio.
- **Descoordinación** entre órganos administrativos y falta de interrelación entre áreas (salud, trabajo decente, vivienda, protección social...).
- **Institucionalización de los derechos**: programas de ayudas en vivienda para personas en situación de vulnerabilidad/exclusión severa sin acceso directo¹⁴.

13 Informe de Provienda (2024) 'Rehabilitación justa y sostenible para una vivienda asequible'. <https://www.provienda.org/rehabilitacion-justa-vivienda/>

14 **Junta de Andalucía** (2020) Orden de 27 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, y a las Administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, que faciliten una solución habitacional a dichas personas. **Gobierno de Aragón** (2020) DECRETO 83/2020, de 30 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021

2/

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS



- **Adoptando medidas (legislativas y de políticas públicas) hasta el máximo de los recursos** de que dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales (Artículo 4 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
- **Adoptando medidas de inmediato en cinco esferas esenciales:** eliminación de la discriminación; derechos económicos, sociales y culturales no sujetos al logro progresivo de la efectividad; obligación de “adoptar medidas”; prohibición de medidas regresivas; y obligaciones mínimas esenciales.

El marco y contenido del **derecho humano a una vivienda adecuada** (Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) lo encontramos en la **Observación General n° 4 Comité DESC (E/1992/23)** y en la **Observación General n° 7 (E/1998/22)**.



Cuadro N° 1. Contenido mínimo del DHVA. Elaboración por EAPN-ES

Para ese disfrute transversal, compartido e interrelacionado de los derechos humanos en torno al acceso a una vivienda digna y adecuada y a un entorno (Hábitat) limpio, inclusivo, sustentable y asequible, han de estar presentes:

➤ **Espacio físico:** vivienda y entorno

➤ **Integralidad de la persona:**

- **Sentido vital:** el ser humano único en sí mismo y en su desarrollo integral.
- **Ámbito relacional:** el ser humano con los otros (familia, vecindario, población, sociedad...)
- **Derechos humanos:** el acceso, sostén y garantía de todos y cada uno de los derechos, en conjunto y al mismo nivel: empleo, educación, participación, salud, protección social, buena administración, vivienda etc.

Por lo tanto, el derecho humano a una vivienda adecuada no solo afecta a la construcción física; la interdependencia de los derechos humanos implica que la no realización de este derecho conlleva vulneraciones de otros derechos fundamentales, esenciales y, por ello, catalogados también como derechos humanos (agua, protección social, salud, trabajo decente...). Asimismo, y derivado de la indivisibilidad de los derechos humanos, los elementos constitutivos de una vivienda adecuada deben coexistir para garantizar este derecho. Así, tal y como lo desarrollan las Observaciones Generales nº. 4 y nº 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la adecuación implica la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura, unas condiciones apropiadas de habitabilidad, la asequibilidad, situarse en un espacio que permita el acceso al empleo, escuelas, servicios de atención sanitaria y otros esenciales, la adaptabilidad y accesibilidad a las condiciones de la persona, y el hecho de que los gastos relacionados con ella sean soportables.

3 /

RECOMENDACIONES DE NACIONES UNIDAS HECHAS A ESPAÑA EN REFERENCIA A POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DEL DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA

- **Informe Visita España 2006 Relator Especial para una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas:** España debería adoptar una política nacional de vivienda integral y coordinada, basada en los derechos humanos y en la protección de los más vulnerables. En ese contexto, el Relator Especial insta a que se adopte un enfoque indivisible de los derechos humanos en lo que respecta a las políticas sobre vivienda adecuada. Además, es necesario incorporar políticas sociales en todos los planes y políticas sobre urbanismo y vivienda.
- **Dictámenes condenatorios a España del Comité DESC** por vulnerar el artículo 11 del PIDESC, Derecho a una vivienda adecuada: (E/C.12/55/D/2/2014; E/C.12/61/D/5/2015; E/C.12/66/D/37/2018; E/C.12/67/D/52/2018; E/C.12/67/D/52/2018; EC/12/69/D/54/2018; EC/12/69/D/85/2018; E/C.12/71/D/127/2019; E/C.12/72/D/26/2018; E/C.12/73/D/134/2019: Formular e implementar, en coordinación con las comunidades autónomas y hasta el máximo de los recursos disponibles, **un plan comprensivo e integral para garantizar el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos**, de conformidad con la Observación general N.º 4. Este plan deberá incluir los recursos, las medidas, los plazos y los criterios de evaluación, que permitirán en forma razonable y verificable garantizar el derecho a la vivienda de esas personas.
- **Observaciones finales al V y VI Informe Español de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 2018 de Naciones Unidas y sus protocolos facultativos en España:** Respecto a la asignación de recursos, el Comité destaca el efecto negativo de las reducciones de la inversión pública, en particular con respecto a los niños y las niñas vulnerables, incluidos quienes viven en familias de bajos ingresos y familias romaníes, principalmente en las esferas de la educación, la salud y la vivienda. Recomienda que se mejore la prestación de servicios básicos y de vivienda y fortalezca el apoyo a las familias que se enfrentan al desahucio por dificultades financieras y, recordando el dictamen del Comité DESC, vele por que se preste una atención particular a los desahucios que afecten a niños.
- **6º Informe Periódico Comité DESC 2018:** Adoptar todas las medidas necesarias, incluso mediante la asignación de recursos suficientes, para **hacer frente al déficit de vivienda social**, especialmente para las personas y grupos sociales más desfavorecidos, como las personas y hogares de bajos ingresos, las personas jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad.

- **Comunicación Relatoría Especial para una Vivienda Adecuada¹⁵** de Naciones Unidas (y otros) en marzo de 2019: Reconocer el impacto de la financiarización de la vivienda en el disfrute del derecho a una vivienda adecuada, en particular para los grupos minoritarios y vulnerables, y a que **adopte medidas concertadas para devolver la vivienda a su función básica como bien social**.
- **Informe Visita España 2020 Relator Especial sobre Extrema Pobreza y DDHH de Naciones UNIDAS:** Tomar en serio el derecho a la vivienda. Aumentar considerablemente las inversiones en vivienda protegida. Actuar para impedir la privatización de las viviendas de bajo costo existentes. Apoyar más a las personas que corren el riesgo de quedarse sin hogar.
- **3er Ciclo Examen Periódico Universal (EPU) 2020** (Consejo de Derechos Humanos): Adoptar un **marco legislativo relacionado con el derecho a la vivienda destinado, en particular, a garantizar que las personas desalojadas** tengan acceso a una indemnización u otra vivienda digna. Que estén informadas de la decisión de desalojo y que tengan acceso a un recurso judicial efectivo (aceptada por España para implementar en el 4º Ciclo EPU 2020-2024).

15 Naciones Unidas (2019) "States and real estate private equity firms questioned for compliance with human rights". Recuperado de: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24404&LangID=E>

4/

ESTRATEGIA DE VIVIENDA BASADA EN LOS DERECHOS HUMANOS, ¿DESDE QUÉ PARÁMETROS?

1. Los problemas de los derechos humanos deben ser detectados y abordados como tales:

- ↪ La falta de vivienda adecuada no es solo un fracaso de un programa, es una violación de DDHH.

2. Los derechos humanos cambian el modo en que los Gobiernos interactúan con las personas:

- ↪ Las personas que carecen de vivienda adecuada no son beneficiarias de programas u objeto de ellos; son titulares de derechos. Sujetos activos.

3. Los derechos humanos ayudan a detectar lagunas y deficiencias estructurales en los sistemas y programas de vivienda:

- ↪ Las personas afectadas son las que mejor detectan las deficiencias o problemas de las Políticas Públicas; es necesario reconocer su experiencia como titulares de derechos.

4. Los derechos humanos aclaran la adopción de decisiones y la rendición de cuentas:

- ↪ El acceso de todas las personas a una vivienda adecuada requiere la intervención de múltiples actores. La obligación legal de rendir cuentas es de los Gobiernos.

5. Los derechos humanos tienen primacía sobre las otras leyes y proporcionan un marco para la gobernanza y la adopción de todo tipo de decisiones:

- ↪ Aportan coherencia y coordinación a las diversas legislaciones y políticas.
- ↪ Conllevan un propósito común y valores compartidos.
- ↪ Responden a cada contexto/ circunstancia.
- ↪ Incorporan normas universales

6. Los derechos humanos son un motor de cambio:

- ↪ Las reclamaciones en derechos humanos nos señalan lo que no funciona o hay que cambiar. El derecho humano define las obligaciones de los Estados y exige una visión y un proceso para hacerlo efectivo.

5/

DIEZ PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA UNA ESTRATEGIA DE VIVIENDA BASADA EN DERECHOS HUMANOS

En marzo de 2018 la **Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación** a este respecto de la ONU presentaba su Informe Anual¹⁶ ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

En él desarrolla diez principios fundamentales para una estrategia de vivienda basada en derechos humanos por parte de los Estados miembros. En sus conclusiones y recomendaciones propone utilizarlos como guía de “comprobación” de la existencia o necesidad de dicha estrategia; y así *dar cumplimiento a los compromisos recogidos en la Nueva Agenda Urbana¹⁷ y la Agenda 2030¹⁸*. Ya que, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) estableció hace décadas en su Observación General n° 4, el derecho a una vivienda adecuada se hace realidad mediante su implementación por los Gobiernos.¹⁹

En 2020, estos diez fundamentos son el sustento de las 16 directrices que la Relatoría recomienda a los países miembro de la Comunidad Internacional para llevar a cabo políticas públicas con enfoque basado en derechos humanos²⁰.

El Parlamento Europeo²¹ las adopta por resolución en 2021.

Creemos que ahora, y sin más demora, nuevamente **estamos ante un momento clave para afrontar las múltiples situaciones de exclusión residencial que viven decenas de miles de personas y familias en nuestro Estado**. Proponemos hacerlo con una estrategia de vivienda basada en derechos humanos, coordinada entre todos los sectores y ámbitos, como se describe y fundamenta en los siguientes diez principios propuestos por la ya ex relatora especial Leilani Farha a toda la comunidad internacional.

-
- 16 FARHA, F. (2018) Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto A/HRC/37/53
 - 17 ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS (2017) Nueva Agenda Urbana A/RES/71/256. (en línea). <http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf>
 - 18 ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A/RES/70/1
 - 19 COMITÉ DESC ONU (1991) Art. 11 Observación general N° 4 El derecho a una vivienda adecuada. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4759&Lang=en
 - 20 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS (2020) A/HRC/43/43 <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/353/93/pdf/g1935393.pdf?token=JniCbcYUPEietSRQ3v&fe=true>
 - 21 PARLAMENTO EUROPEO (2021) Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre el acceso a una vivienda digna y adecuada para todos https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0020_ES.html



PRINCIPIO N° 1

Basarse en la legislación y las normas jurídicas



Propuestas de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada:

- La estrategia debe procurar el reconocimiento del Derecho Humano a la Vivienda como un derecho real, sujeto a recursos efectivos (**derecho subjetivo- justiciabilidad**)
- Logro progresivo en un **plazo razonable y con todos los recursos disponibles** y medidas suficientes por parte de los Estados (compromiso internacional en los Pactos).
- Objetivo final: **acabar con la falta de hogar**
- Se viola el derecho humano a una vivienda adecuada cuando una parte considerable de un Estado carece de alojamiento/vivienda básicos.
- Los **desalojos forzosos sin alojamiento alternativo** constituyen una vulneración grave de los derechos humanos.
- Una estrategia de vivienda basada en los derechos humanos debe contener las **obligaciones de los Estados**: respetar, proteger y hacer efectivo el Derecho Humano a la Vivienda.
- **No consiste solo en un conjunto de normas** sino en una visión transformadora y un llamamiento a la acción (“documentos vivos” evolucionando junto con la realidad que tratan de regular)
- **(Añadimos) Objetivo final: acabar con la falta de hogar y con los hogares que no garantizan unas condiciones de vida dignas e inclusivas.**

Espejo²² en el Estado español:

- **Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda²³.** Artículo 1.1 1.ª “Esta ley tiene por objeto regular, en el ámbito de competencias del Estado, las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con la vivienda y, en particular, **el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada** y al disfrute de la misma en condiciones asequibles, atendiendo al cumplimiento de lo dispuesto en los instrumentos internacionales ratificados por España y respetando en todo caso las competencias de las comunidades autónomas y, específicamente, las que tienen atribuidas en materia de vivienda”.
- Nuestro Tribunal Constitucional acaba de reconocer a la vivienda como derecho constitucional y ha venido limitando su ámbito de justiciabilidad:
 - **STC 79/2024**, de 21 de mayo, ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía²⁴ donde, además de establecer como **derecho constitucional** el acceso a una vivienda digna y adecuada y lo hace con la competencia estatal de su reconocimiento (art. 149.1.1CE). Entre otros, considera que la existencia de vivienda social, la de emergencia, la protegida de precio limitado y la asequible incentivada; en su finalidad de facilitar el acceso a vivienda de personas u hogares con dificultades para hacerlo, es igualmente constitucional. Así también, en el desarrollo de la función social de la vivienda, lo es poner límites a los grandes tenedores o cumplir deberes y cargas por parte de la propiedad (zonas de mercado tensionado) y cuidar el parque público de vivienda a nivel estatal.
 - **STC 32/2019**, sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas señalaba en su Fundamento número 6: conviene recordar ante todo que el art. 47 CE no reconoce un derecho fundamental, sino que enuncia “un mandato o directriz constitucional que ha de informar la actuación de todos los poderes públicos (art. 53.3 CE) en el ejercicio de sus respectivas competencias” (STC 152/1988, de 20 de julio, FJ 2; y en el mismo sentido, SSTC 59/1995, de 17 de marzo, FJ 3, y 36/2012, de 15 de marzo, FJ 4). Los poderes públicos vienen así obligados a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en particular regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, conforme determina el art. 47 CE.

22 En referencia al ámbito estatal. Para ampliación sobre situación derecho humano a la vivienda en la legislación autonómica: Informe de Cáritas Española 2019 presentado ante Relatoría Especial de Naciones Unidas para una Vivienda Adecuada (pp.5) <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/CaritasSpain.pdf>

23 JEATURA DEL ESTADO (2023) “Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda” <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-12203>

24 Recurso de inconstitucionalidad núm. 5491-2023, promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía contra los arts. 3 f), g) y k); 8 a) y c); 9 e); 11.1 e); 15.1 e); 16; 18, apartados 2, 3 y 4; 19 apartado 1, inciso segundo, y apartado 3; 27 apartado 1, párrafo tercero, y apartado 3; 28; 29; 32; 33; 34; 35 y 36; disposición adicional tercera; disposición transitoria primera; disposición final primera, apartados uno, tres y seis, y disposición final cuarta de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Han comparecido el Senado, el Congreso de los Diputados y el Gobierno de la Nación, habiendo formulado alegaciones este último. Ha sido ponente la magistrada doña María Luisa Segoviano Astaburuaga.

- Por tanto, en la medida en que el art. 47 CE no garantiza un derecho fundamental, sino que enuncia un principio rector de la política social y económica, una directriz constitucional dirigida a los poderes públicos (...).
 - STC 16/2018, 80/2018 y 97/2018: declara inconstitucional el **derecho subjetivo a la vivienda** reclamable ante el poder judicial en Navarra, Valencia y País Vasco (efectivo administrativamente).
 - STC Nota Informativa 52/2024²⁵: donde el TC reconoce como **derecho constitucional** el derecho a la vivienda.
- Artículo 4 del texto refundido de la Ley del Suelo 2/2008, donde se reconoce explícitamente un **derecho a la vivienda de “todas/os” las/los españolas/es**.
- Inversión en **vivienda pública**: El volumen de vivienda protegida construida es la más baja desde 1950. Disminución del 96% con respecto a 2008.
- Los **Planes estatales de vivienda**, en palabras del Ministerio de Fomento en los primeros meses de 2018, han tenido una apuesta “decidida por la propiedad” siendo “prácticamente inexistentes los parques públicos de vivienda social, sobre todo el alquiler”.²⁶
- Las **políticas fiscales en los diferentes niveles territoriales** (IRPF, IVA, transmisiones patrimoniales, licencias, plusvalía, IBI etc.) han sido constantes en “los incentivos ofrecidos por los poderes públicos y unas condiciones financieras favorables al endeudamiento”²⁷ y sólo cuando ya comenzaba la “salida” de la crisis económica de 2013 se terminó con la figura de la desgravación fiscal por inversión en vivienda (tras diversas oscilaciones).
- **Disposición de suelo residencial**, “en la actualidad, las entidades crediticias son las grandes propietarias de **suelo calificado** en España, aunque una parte considerable de ese suelo ha pasado a la SAREB”²⁸
- Incluso, en la llamada “respuesta a la emergencia habitacional” de los años 2008-2013, podría haberse esperado una clara opción por el desarrollo del derecho humano a la vivienda; por contra, se centró en **políticas financieras** diseñadas por el Ministerio de Economía y Em-

25 TC (2024) https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2024_052/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2052-2024.pdf

26 MINISTERIO DE FOMENTO (2018) Versión 1.0 Agenda Urbana Española. (en línea). https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/AGENDA_2030/AUE.htm, acceso 21 de septiembre de 2018.

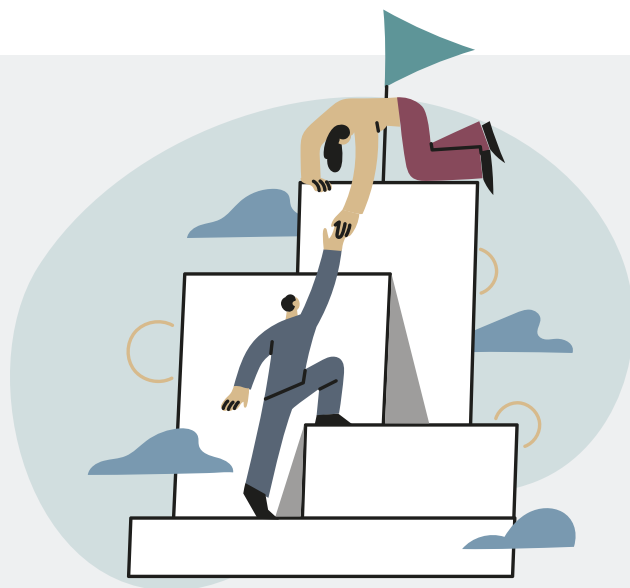
27 JEFATURA DEL ESTADO (2009) Preámbulo. Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios.

28 LEAL MALDONADO, J; MARTINEZ DEL OLMO, A. (2017) Cuadernos de Relaciones Laborales 35 (1) pp. 15-41

presa (denominada en varias herramientas jurídicas²⁹ como de **“protección a los deudores de créditos hipotecarios”**) con las medidas de paralización de lanzamientos hipotecarios (todavía vigente), creación del Fondo Social de Viviendas y del Código de Buenas Prácticas.

- Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2023 (Ley por el Derecho a la Vivienda): sólo **suspensión temporal de desalojos forzosos en situaciones de vulnerabilidad** con informe de Servicios Sociales (2/4 meses) pero no hasta que se provea de alojamiento alternativo. Introducción del mecanismo de la conciliación o intermediación previa cuando sea gran tenedor el propietario de la vivienda (Disposición Final 5ª).
- II Plan Nacional de Accesibilidad (Medida 4.1.1) **Promover mejoras de accesibilidad universal en normativa y políticas públicas de vivienda.**

29 JEFATURA DEL ESTADO (2012) Reales Decretos Leyes 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. (2013) Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social compendia los anteriores decretos de 2012. (2015) Real Decreto 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de 2ª Oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. (2017) Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social



PRINCIPIO N° 2

Dar prioridad a las personas más necesitadas y garantizar la igualdad



Propuestas de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada:

- Obligación inmediata de los Estados sin esperar a la debida progresividad en el aumento de recursos invertidos: **derecho a la igualdad y no discriminación**.
- Necesidad de **evaluar la realidad** y ver qué comunidades y poblaciones están en situación de mayor vulnerabilidad.
- Dar prioridad a **zonas vulnerables** (planes de desarrollo y prevención, reasentamiento etc.)
- Proveer de recursos y capacidad técnica para fortalecer y mejorar viviendas desde los conocimientos especializados de la propia población local.
- Atender a las **causas estructurales que subyacen a la necesidad de vivienda**: los programas tipo “Housing First” han de complementarse con programas de protección social adecuados, vivienda social y vivienda asequible...
- **El derecho humano a la Igualdad** es un derecho sustantivo y requiere medidas positivas para paliar su vulneración (discriminación y exclusión).
- **Grupos sociales más vulnerables**: mujeres, personas con discapacidad, en pobreza, migrantes, minorías raciales y étnicas, pueblos indígenas, jóvenes, personas de edad, LGTBI, y personas en situación de sinhogarismo.
- **(Añadimos) En relación a los grupos vulnerables, en el caso español se observan situaciones de exclusión residencial que afectan de manera significativamente distinta a determinados perfiles de personas o grupos sociales, como por ejemplo personas mayores o de edad avanzada, familias con hijos a cargo, personas jóvenes ex-tuteladas o personas en situación de chabolismo en asentamientos segregados**

- (Añadimos): Es preciso atender las causas estructurales que subyacen a la necesidad de vivienda complementando las actuaciones de acceso a una vivienda con programas de protección social adecuados y adaptados a la persona y la unidad familiar, para garantizar el derecho y su sostenibilidad, y evitar generalizar el uso de estrategias o programas que, aunque son exitosos para un tipo de realidades, pueden no resultar adecuados para otras.

Espejo en el Estado español:

- Desde 2008, los **Planes Estatales de Vivienda han contemplado la desprotección y/o vulnerabilidad** como supuesto de priorización en el acceso a sus programas. Los Planes de 2009-2012³⁰, 2018-2021³¹ y 2022-2025³² son los que más situaciones han incluido, y el de 2013-2016³³ el que menos (por ejemplo, sacaba del rango de protección especial a las personas sin hogar, que ahora vuelve a estar incluido en el actual). En el efectivo desarrollo de la priorización, el Plan de 2009-2012 incluía un Programa específico de alojamientos para colectivos especialmente vulnerables y otros colectivos específicos a través de arrendamientos protegidos (25 años). El actual de 2022, contempla una línea de programas para las situaciones de desalojos. Pero, por otra parte, cuando se desarrollan sus programas de acceso a vivienda en alquiler, no encontramos criterios de priorización de situaciones socio familiares que añaden mayor vulnerabilidad (niños y niñas, familias monomarentales, personas con discapacidad³⁴, sinhogarismo - en particular sin techo y sin vivienda de la Tipología ETHOS-³⁵) ni tampoco ayudas fiscales como podría ser la desgravación por alquiler.
- En relación a la **intervención en situaciones de infravivienda en entornos segregados o chabolismo**, el *Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012*, introducía, dentro de sus ejes de actuación y como objetivo prioritario, la erradicación de la infravivienda y del chabolismo. Las ayudas contempladas en este Plan se concentraban en subvenciones destinadas a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, que dispusieran de programas específicos o de cooperación para la erradicación de situaciones de chabolismo, impulsados a través de los convenios bilaterales de colaboración entre las Consejerías de Vivienda y Urbanismo y el propio Ministerio de Vivienda, si bien las necesidades las establecían los propios Ayuntamientos, abonándose dichas ayudas a través de las Comunidades Autónomas de la forma acordada con las mismas (PEVR: Capítulo III, Eje 3, Sección 3ª, artículos 54,55 y 56).

30 MINISTERIO DE VIVIENDA (2008) Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012

31 MINISTERIO DE FOMENTO (2018) Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

32 MINISTERIO DE FOMENTO (2022) Real Decreto 42/2022, de 18 de enero por el que se regula el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025

33 MINISTERIO DE FOMENTO (2013) Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

34 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (2013) Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

35 FEANTSA Tipología europea de Sin Hogar y Exclusión Residencial. https://www.feantsa.org/download/ethos_spain-24518105836657575492.pdf, acceso 21 de septiembre de 2018.

- Ya no es hasta 2018 que de nuevo una política estatal, el *Plan Estatal de Vivienda 2018-2021*, y el actualmente vigente *Plan Estatal 2022-2025* (Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025) contemplan el cumplimiento de la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. En estos Planes se subraya su necesaria “vocación social”, reconociendo las graves dificultades que existen en el disfrute de una vivienda, especialmente para los sectores más vulnerables, contemplando específicamente los supuestos de infravivienda y chabolismo a través de un programa específico para la regeneración y renovación de zonas degradadas y de ámbitos en los que existe chabolismo e infravivienda con objeto de mejorar los tejidos residenciales, recuperar conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados, incluidos expresamente la infravivienda y el chabolismo, y núcleos rurales, que enfoca además de manera explícita la inclusión social de las familias a través del disfrute de una vivienda digna en un contexto integrador, reconociendo la necesidad de revertir las situaciones de segregación residencial que viven las familias en entornos chabolistas. Para hacerlo efectivo, el Plan 22-25 incluye un Programa específico que tiene como objeto la financiación de la realización conjunta de actuaciones de rehabilitación de viviendas, de renovación y nueva edificación de viviendas, de urbanización o reurbanización de los entornos de las viviendas rehabilitadas, renovadas o edificadas, de realojos y de gastos profesionales y de gestión inherentes a la erradicación de áreas abandonadas, obsoletas o en declive y, en todo caso, en aquellas en que exista chabolismo y/o infravivienda, con el fin último de contribuir a la inclusión social de las personas y unidades de convivencia afectadas a través del disfrute de una vivienda digna y adecuada en un contexto integrador. Por primera vez, en abril de 2020, y con la reforma del **Plan Estatal de Vivienda 2018-2021** por Orden³⁶ TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19; se incorporó la posibilidad de ayudas económicas al sostenimiento del alojamiento (y no sólo situaciones de alquiler de vivienda habitual) **para personas y familias en diversas situaciones de vulnerabilidad: víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas en situación de sinhogarismo y otras personas especialmente vulnerables**. No obstante, en el programa, no se observa una referencia explícita a todos los grupos sociales y personas que padecen vulnerabilidad o exclusión residencial recogidos en la mencionada tipología ETHOS, y, por consiguiente, los conceptos “Sin Hogar” y “otras personas especialmente vulnerables” quedan sujetos a un amplio margen de arbitrariedad en la aplicación de los programas a nivel autonómico. En el actual Plan Estatal de Vivienda (2022-2025), se incluyen nuevos programas para dar respuesta a personas y familias afectadas por la vivienda: programas de ayuda a arrendatarios en situación de vulnerabilidad sobrevenida, programas de incremento del parque público de viviendas, programa de fomento del parque privado

de vivienda en alquiler asequible o programa de alojamientos temporales, entre otros. Este Plan continua en la línea de la reforma de 2020 con la continuidad de la inclusión en el programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda, con el objetivo de facilitar un acceso inmediato y efectivo ante situaciones de emergencia habitacional y exclusión social, económica y residencial.

➤ **Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana³⁷** La **Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano 2021-2030** sigue las directrices establecidas en el Marco Estratégico Europeo 2020- 2030 para la Igualdad, la Inclusión y la Participación de la población gitana y la nueva normativa de los Fondos Europeos (FE) para el período 2021- 2027, que, con base en los aprendizajes y el balance de las estrategias nacionales de la última década, proponen un planteamiento de los esfuerzos estatales para combatir la discriminación con base étnica o racial en los distintos ámbitos socioeconómicos. La Estrategia reconoce los retrocesos provocados por la crisis generada por la pandemia de la COVID-19 y el **recrudescimiento de la situación de la población gitana en la vivienda**, especialmente en las personas que aún viven en **infraviviendas o asentamientos**. Esta realidad defiende la necesidad de contar con datos sobre la situación de las infraestructuras en asentamientos para diseñar medidas destinadas a ello.

Sus principales objetivos son continuar avanzando en la mejora de las condiciones de habitabilidad de las personas gitanas, erradicando el chabolismo, reduciendo la infravivienda y mejorando el equipamiento básico de la vivienda (incluyendo los servicios digitales) y las infraestructuras y equipamiento urbano de los entornos en los que se ubican. Y define cómo hacerlo a través de las siguientes líneas de actuación: 1. Garantizar los servicios esenciales. La reducción de las carencias de equipamiento básico debe estar asociada a la garantía del derecho a una vivienda digna, lo que significa tener acceso a agua, saneamiento, electricidad y a poder tener la casa a una temperatura adecuada. Además, es necesario garantizar el acceso a internet para poder disfrutar de los servicios públicos telemáticos, que cada vez están más presentes en la sociedad española y la brecha digital puede suponer una vulneración del derecho a su disfrute. 2. Reducir la concentración residencial de los hogares gitanos, distribuyendo a la población gitana en viviendas ubicadas en distintas zonas dentro de las ciudades, evitando la concentración de personas gitanas en los mismos barrios. 3. Fomentar la coordinación de acciones dirigidas a eliminar situaciones de racismo, antigitanismo o cualquier otro tipo de discriminación en el acceso al mercado de alquiler de viviendas.

La Estrategia recoge como **meta final la erradicación completa del chabolismo (0%)** y la reducción de la tasa de infravivienda al 3% en 2030; la reducción de la segregación y la concentración residencial de la población gitana al 1%; Garantizar el acceso a servicios esenciales a la población gitana y mejorar el equipamiento básico y calidad de las viviendas (llegando al 0% de hogares sin acceso a agua o electricidad, incrementando el número

37 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (2012) https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/docs/WEB_POBLACION_GITANA_2012.pdf

de hogares con acceso a calefacción hasta el 50%, reduciendo las tasas de hacinamiento al 4% y los hogares en estado de conservación al 20%, eliminando completamente los barrios sin servicio de recogida de basuras, sin alumbrado público, sin pavimentación o sin alcantarillado público); y, por último, reducir la tasa discriminación percibida en el acceso a la vivienda hasta el 15%. El punto de partida se apoya en el último Estudio-Mapa sobre vivienda y población gitana en España, 2015³⁸.

- **Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo 2023-2030.** En continuidad con la anterior estrategia, aunque habla de personas sin hogar, tan sólo plantea actuaciones con los colectivos 1 y 2 de ETHOS, dejando fuera al resto de personas agrupadas en las categorías 3 y 4, también sin hogar.
- **II Plan Nacional de Accesibilidad (2023-2032).** España país accesible, la hoja de ruta que guiará al Estado español en esta materia durante los próximos años, para dar consecución a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.³⁹
- Estrategia Nacional de **Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030**⁴⁰.
- **Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (2023-2030)**⁴¹ contempla en el área estratégica tercera la importancia de un entorno saludable y el acceso a una vivienda adecuada como elementos necesarios para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, y lo relaciona con el artículo 27 de la CDN, los ODS y la Garantía Infantil Europea. Incluye entre sus líneas de acción “el acceso a una vivienda adecuada, priorizando la intervención energética y mejoras en las condiciones de salubridad, y en un entorno inclusivo, que garantice que los niños, niñas y adolescentes vivan en entornos donde puedan desarrollarse plenamente”.
- **La Garantía Infantil Europea (2021)**⁴² tiene como una de sus cinco metas el acceso efectivo de los niños y las niñas más vulnerables a la vivienda: Su **Plan de Acción Estatal (2022-2030)**⁴³ contempla medidas e indicadores de logro en tres objetivos relacionadas: acceso a la vivienda, disminuir la incidencia de la pobreza energética y eliminar la infravivienda. Además de promover la desinstitucionalización en el sistema de protección de menores de edad.

38 MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (2016) Estudio-Mapa sobre vivienda y población gitana en España, 2015 <https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/informesyEstudios.htm>

39 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (2023) II Plan Nacional de Accesibilidad universal https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/docs/II_Plan_Accesibilidad_Universal_Revisado_ortograf.pdf

40 MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL. https://www.dsca.gob.es/sites/default/files/noticias/Estrategia_Nacional_de_Prevenci%C3%B3n_y_Lucha_contra_la_Pobreza_2024.pdf

41 <https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx?id=8314&tipo=documento>

42 https://www.juventudeinfancia.gob.es/sites/default/files/Recomendacion_UE_2021_1004.pdf

43 https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/sites/default/files/2023-01/PlanAccion_MAS_220706_104155.pdf

- Estrategia Nacional contra la **Pobreza Energética**⁴⁴ 2019-2024. En ella se establece el objetivo de reducir, para 2025, los indicadores EPOV⁴⁵ como mínimo un 25% los valores de 2017, pero apostando por realizar un esfuerzo para alcanzar una reducción del 50% en esa fecha. En materia del bono social, debieran plantearse medidas para su optimización como pueden ser: 1. Bono social energético que contemple tarifas sociales para diferentes suministros, incluido el agua potable (actualmente el bono es únicamente eléctrico y térmico); 2. Inclusión en circunstancia especial el hecho de que todos los miembros de un hogar estén en desempleo (o ERTE); 3. Permitir la acreditación de la residencia en la vivienda y, por ende, el ser consumidor a través del contrato de alquiler en vigencia o contrato de cesión (actualmente solo se puede acreditar con empadronamiento y titularidad del suministro); 4. Aplicación a la cantidad endeudada los mismos porcentajes de bonificación previstos (25% en el caso de consumidores vulnerables y 40% en el caso de consumidores vulnerables severo), una vez acreditados los requisitos de acceso al bono; 5. Revisión de los umbrales de renta establecidos para la obtención del Bono Social, valorando utilizar el Salario Mínimo Interprofesional en lugar del IPREM.
- **Normativa Covid-19** para personas y familias vulnerables.⁴⁶
- Instrucciones del Ministerio de Derechos Sociales para personas en **situación de calle**⁴⁷ y para barrios **vulnerables y asentamientos**⁴⁸.
- Constatación de la **efectiva discriminación**⁴⁹ en el acceso y sostenimiento de la vivienda por parte de **personas y familias extranjeras y de la población gitana**⁵⁰, lo que deberá **abordarse necesariamente** así como otros grupos especialmente vulnerables, lo que deberá vigilarse especialmente en el marco de la **Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación**, que en su artículo 20 aborda este derecho en el ámbito de la vivienda, remarcando las obligaciones de las administraciones a través de las políticas públicas de

44 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (2019) https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategianacionalcontralapobrezaenergetica2019-2024_tcm30-496282.pdf

45 Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos (2025: entre el 4% y 6%); Retraso en el pago de las facturas de los suministros (en 2025: entre el 3,7% y 5,5%); Pobreza energética escondida (2025: entre el 5,7% y el 8,6%); Gasto desproporcionado con respecto a los ingresos (2025: entre el 8,6% y el 12,9%).

46 CARITAS ESPAÑOLA (2020) Informe Vivienda y COVID 19 presentado ante Naciones Unidas <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/callCovid19.aspx>

47 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (2020) Documento Técnico de recomendaciones de actuación ante la crisis por Covid-19, para los gestores de Servicios Sociales de atención a personas sin hogar. https://www.imsero.es/InterPresent1/groups/imsero/documents/binario/rec_gestores_sinhogar_covid-19.pdf

48 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (2020) Documento Técnico de recomendaciones de actuación ante la crisis por Covid-19 en asentamientos segregados y barrios altamente vulnerables https://www.imsero.es/InterPresent1/groups/imsero/documents/binario/rec_gestores_abvuL_covid-19.pdf

49 PROVIVIENDA (2020) "Informe '¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler'- Octubre 2020 <https://www.provivienda.org/informe-se-alquila-racismo-xenofobia-mercado-alquiler/>

50 Para más información sobre los casos de discriminación en el acceso a la vivienda que sufren las personas gitanas en España, ver informes "Discriminación y Comunidad Gitana" publicados anualmente por Fundación Secretariado Gitano desde 2005, disponibles en: <https://informesdiscriminacion.gitanos.org/>

urbanismo y vivienda así como de los prestadores de servicios de venta, arrendamiento, intermediación inmobiliaria, portales de anuncios, o cualquier otra persona física o jurídica con oferta disponible.⁵¹

- El conocimiento empírico en torno a la realidad del sinhogarismo y la exclusión residencial en España continúa estando muy limitado en la actualidad. Principalmente, esta limitación se debe a las siguientes causas: a nivel Estatal, los estudios cuantitativos más importantes como las Encuestas de Personas Sin Hogar (los últimos datos publicados en la página del INE son de 2022), la Encuesta sobre Centros y Servicios de atención a las personas sin hogar, se centran tan sólo en las situaciones de sinhogarismo sin techo y sin vivienda según ETHOS. En el mes de diciembre de 2023, se ha presentado los principales resultados del proyecto piloto de recuentos nocturnos de personas en situación de sinhogarismo. Este proyecto surge por la necesidad de la unificación en la metodología común para los recuentos nocturnos.⁵² El único estudio cuantitativo de carácter Estatal que ha abordado otras situaciones (vivienda insegura e inadecuada según ETHOS) ha sido el citado, FOCUS vulneración de derechos: Vivienda, publicado por Fundación FOESSA en 2019. A su vez, a pesar de que algunos de los censos y recuentos nocturnos que se vienen realizando con relativa regularidad en diversas ciudades españolas, están integrando progresivamente en el análisis otras categorías distintas a las tradicionales 1 y 2 de ETHOS, como las personas que residen en viviendas inadecuadas (en asentamientos)⁵³, el conocimiento de otras realidades continúa siendo muy limitado. Cabe añadir, que una de las principales consecuencias de la implementación todavía hegemónica, de la mirada tradicional del sinhogarismo para abordar el estudio del fenómeno de la exclusión residencial, es que se está contribuyendo a invisibilizar la situación de las mujeres que se ven afectadas por dicha problemática. Además, diversos/as autores/as sostienen que para una correcta incorporación de la perspectiva de género en los estudios sobre sinhogarismo y exclusión residencial y en las políticas públicas, resulta necesario abordar el estudio del fenómeno en todas sus manifestaciones identificadas en la tipología ETHOS⁵⁴, además de, considerar otras situaciones de sinhogarismo encubierto como el que sufren particularmente, las mujeres víctimas de violencia de género, obligadas a convivir con sus agresores en el domicilio familiar ante la insuficiencia de alternativas habitacionales, o las mujeres que trabajan en el sector de empleo de hogar y cuidados como internas y residen en el domicilio de sus empleadoras/es⁵⁵.

51 Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-11589-consolidado.pdf>

52 https://www.dsca.gob.es/sites/default/files/derechos-sociales/servicios-sociales/docs/Inf-final_RNs.2023_FIN.pdf

53 FOESSA (2018) "Focus: Vivienda": <https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2019/06/Focus-Vivienda-FOESSA.pdf>

54 López_Carmona, D.P. (dir) (2019). "Rompiendo con la invisibilidad de las mujeres sin hogar. Perfil y situación social de las mujeres en asentamientos informales en España". Fundación Cepaim. Disponible en: <https://www.cepaim.org/publicacion/rompiendo-con-la-invisibilidad-de-las-mujeres-sin-hogar/>

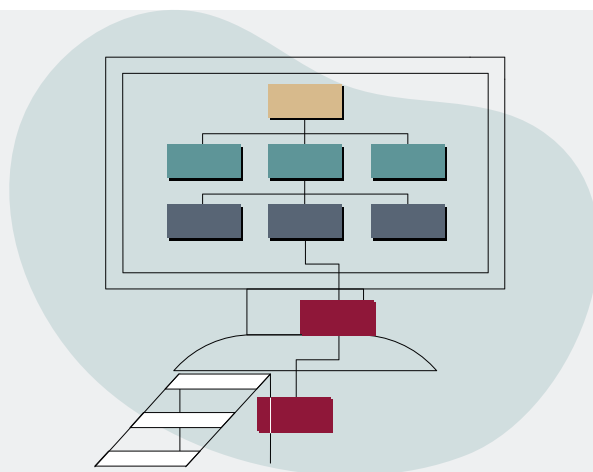
55 Fundación Atenea (2018). "Mujeres y Exclusión Residencial. Más allá del sinhogarismo" disponible en: <https://fundacionaenea.org/OLD/wp-content/uploads/2019/06/Informe-Exclusi%C3%B3n-Residencial-de-las-mujeres.pdf>

- En cuanto al ámbito europeo: relacionado con el derecho a la vivienda y a la especial protección de personas vulnerables, conviene destacar: **El Pilar Europeo de Derechos Sociales** que en su apartado 19 “vivienda y asistencia a las personas sin hogar” recoge que: a) deberá proporcionarse a las personas necesitadas acceso a viviendas sociales y ayudas a la vivienda de buena calidad”; b) las personas vulnerables tienen derecho a una asistencia y protección adecuadas frente a un desalojo; c) Deberá facilitarse a las personas sin hogar un alojamiento y los servicios adecuados con el fin de promover su inclusión social⁵⁶. También, destaca **La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea** que en su artículo 34.3, recoge “Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales⁵⁷. Por último, cabe destacar la ratificación de **La Carta Social Europea revisada** que constituirá todo un hito para la consecución del derecho a la vivienda de los colectivos vulnerables, tal y como se recoge en su artículo 31: “para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, las partes se comprometen a adoptar medidas destinadas a: 1. Favorecer el acceso a la vivienda de un nivel suficiente; 2. Prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación; 3. A hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes⁵⁸. Eso sí, a la espera de la correspondiente ratificación del Protocolo Adicional de Reclamaciones Colectivas, que hará posible la justiciabilidad del derecho.

56 Disponible en: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_es.pdf

57 Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf

58 Disponible en: <https://rm.coe.int/168047e013>



PRINCIPIO N° 3

Tener carácter exhaustivo y abarcar todos los niveles de gobierno

Una estrategia va más allá de un plan. Una estrategia de vivienda implica la articulación de los diferentes ámbitos de un mismo Gobierno, una planificación interinstitucional, para la consecución de un objetivo prioritario: promover la efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. No solamente hay que facilitar el acceso a una vivienda mediante ayudas económicas o provisión de vivienda protegida, en función de un presupuesto, sino que también debe abordar las deficiencias y desigualdades del sistema de provisión residencial, buscando la mayor coordinación posible en la implementación de las leyes, las políticas públicas y su evaluación, para la consecución de dicho objetivo⁵⁹.

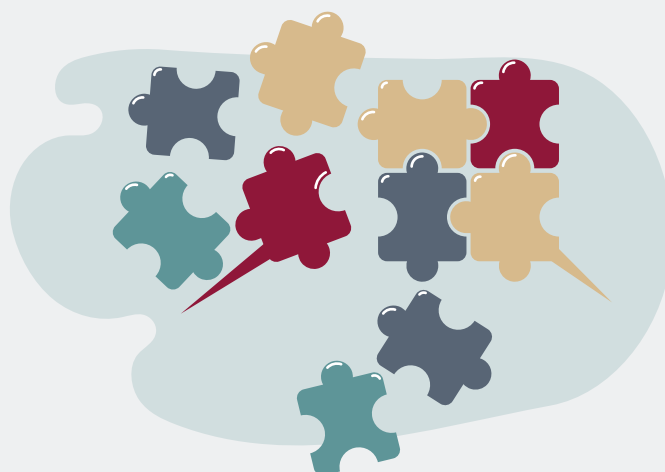
Propuestas de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada:

- **La estrategia tiene que abordar las amenazas:** acaparamiento de suelo e inmuebles, especulación, privatización, préstamos abusivos, degradación ambiental y la vulnerabilidad frente a los desastres climáticos.
- **Abarcar múltiples programas, políticas y esferas de gobierno:** coordinación.
- Participación de **diferentes niveles de gobierno:** local-estatal (con responsabilidades definidas).
- Diversas posibilidades para el logro de los dos últimos puntos, lo fundamental: **tener claras responsabilidades y obligaciones compartidas** y, ante la duda de quién: lo primero adoptar medidas para proteger el Derecho y luego proceder a la resolución de controversias.
- **Abordar zonas urbanas, rurales, periurbanas...** y de forma independiente a la situación en cuanto a la tenencia.
- **(Añadimos): participación de diferentes niveles de gobierno: también regional.**

59 OLEA FERRERAS, S. Y OTROS (2019) "El sistema público de vivienda en el Estado español. Sin estrategia ni fundamentación en los Derechos Humanos". FOESSA 2019

Espejo en el Estado español:

- Elaboración de planes de vivienda y estrategias sectoriales de vivienda (sin hogar, pobreza energética) **sin equipos mixtos de diferentes Ministerios** (en especial fomento/vivienda/agenda urbana y servicios sociales).
- Estrategias definidas para colectivos vulnerables, como la comunidad gitana, que se han diseñado desde la integralidad de programas y acciones multisectoriales pero que **en la práctica solo son desarrolladas por un determinado departamento**.
- Diferentes estudios han subrayado el histórico **desencuentro entre las políticas de urbanismo y de vivienda** en el Estado español⁶⁰, lo que ha supuesto una falta de planificación de soluciones residenciales permanentes para personas en exclusión residencial/sin hogar. De hecho, los planes urbanísticos municipales que determinan el uso dotacional público del suelo podrían asumir la vivienda social como un equipamiento público destinado a satisfacer la residencia de personas con especial vulnerabilidad.
- Elaboración de normativa ante situaciones de emergencia habitacional (2008-2013) **desde el Ministerio de Economía** sin participación de vivienda y servicios sociales.



PRINCIPIO N° 4

Participación basada en derechos

Propuestas de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada:

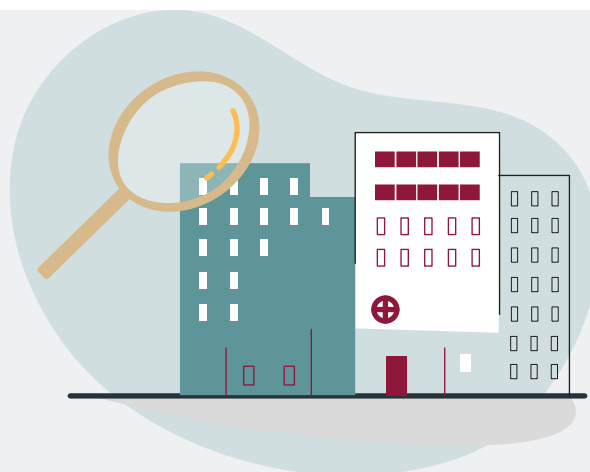
- **Participación significativa** en todas las etapas de la estrategia de vivienda basada en derechos humanos de las personas afectadas (diseño, hasta aplicación y evaluación).
- Participar no es ser consultados.
- Incluir **mecanismos concretos de participación**: consejos, comisiones, comités o grupos de vivienda.
- Especial inclusión de los **Grupos vulnerables** (ver Principio n° 2)
- **Personas desplazadas**: especial protagonismo en la decisión sobre viviendas alternativas.
- **Papel fundamental de los gobiernos locales** en la mediación para el logro de la participación (y posterior labor de hacer llegar a otros espacios y favorecer la negociación intergubernamental).
- **(Añadimos): Papel eficiente del Tercer Sector como espacio que vehicula y media en la participación efectiva de personas en situación de vulnerabilidad residencial.**

Espejo en el Estado español:

- **Agenda Urbana Española⁶¹**: proceso muy participativo y con un resultado muy positivo (diagnóstico, objetivos, indicadores de seguimiento y actuación, datos descriptivos relacionados y diversidad de tipología de objetivos). Al igual que la Agenda Urbana Mundial y la

Agenda Urbana Europea, es un instrumento no vinculante para los niveles estatal, autonómico y local, como así lo recoge ya la Introducción de su Versión Resumen 1.0: La Agenda se concibe como un documento estratégico, sin carácter normativo, que está imbuido de enfoques pragmáticos con vocación de utilidad y, por supuesto, de consenso” y, por tanto, quedará como “un modelo o visión urbana que aporta los aspectos claves deseables y participa de una serie de principios comunes, que querrían generar un verdadero “Sistema Operativo” para las ciudades españolas. Se espera que también sirva de modelo/visión urbana para futuros Planes Estatales de Vivienda.

- El Informe “Derechos desalojados” de Amnistía Internacional, hace referencia a que el Gobierno español, específicamente los representantes del Ministerio de Economía y Competitividad y del Ministerio de Fomento, no consultaron a las personas afectadas y a las organizaciones de la sociedad civil que las representaban en la **configuración de las leyes y medidas adoptadas para la protección de los deudores hipotecarios**⁶² contraviniendo el derecho internacional de los derechos humanos.
- **Los Planes Estatales de Vivienda, Agenda Urbana Española** y la 1ª Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar contaron con interlocución de las entidades sociales y plataformas, pero no con la participación directa de las personas afectadas. En el caso de la actual **Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo** han tenido participación a través de grupos de participación coordinadas por el tercer sector pero sin previsión de cubrir todas las categorías de la tipología Ethos.
- La **Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana** cuenta con el seguimiento y la participación en su diseño del Consejo Estatal de Pueblo Gitano.



PRINCIPIO N° 5

Elaboración de presupuestos responsables y justicia fiscal



Propuestas de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada:

- **Impuestos adicionales** (eliminar lagunas fiscales) y **mayor carga tributaria** a las grandes fortunas (para construir vivienda social, subvenciones hogares bajos ingresos, bancos de tierras etc.)
- **Corrección de disparidades:** No favorecer fiscalmente al propietario frente al arrendatario.
- **Mejora de patrones sistémicos:** favorecer inscripción de vivienda en registro teniendo como titular a la mujer.
- **Incluir la estrategia de vivienda dentro de las medidas seguidas de lucha contra la corrupción.** Supervisando alianzas público-privadas, contratos para la construcción y contratos para la gestión de vivienda.
- Procurar que las empresas multinacionales que se establezcan o expandan en las ciudades o los barrios **aporten recursos para satisfacer la mayor demanda de vivienda que pueden crear.**
- **(Añadimos): Vigilar el cumplimiento de ejecución presupuestaria en los programas dirigidos a objetivos de vivienda e inclusión residencial para colectivos vulnerables, como los Edusi, los Programas Operativos FEDER, los convenios de los Planes Estatales de vivienda, etc.**

Espejo en el Estado español:

- Los PGE de 2018 recogieron un presupuesto para el gasto directo en política de vivienda del entorno de 480 millones de euros.⁶³
- En 2019 fue de 627 millones de euros⁶⁴: Planes de Vivienda protegida y el Plan 20.000 viviendas, con una dotación de 490 y 137 millones de euros, respectivamente.
- La **deducción por compra de vivienda habitual⁶⁵ en el IRPF se suprimió en 2013, sin efecto retroactivo.**
- El **descenso en los presupuestos generales del Estado para vivienda en el periodo 2013–2015** se atribuye a la priorización de la reestructuración y recapitalización del sector bancario español definidos en los Reales Decretos “Guindos”⁶⁶ que entre otras acciones establecía la creación del banco malo la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria).
- Según la contabilidad nacional (gasto por funciones), el conjunto del gasto de las administraciones públicas invirtió en protección social en la vivienda 421 millones, un 0,17% del total del gasto en protección social de ese año. Aunque este gasto se ha incrementado desde 2018 sigue muy por debajo de años anteriores.⁶⁷



63 MINHAFP (2018): Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018. Libro Amarillo. Ministerio de Hacienda y Función Pública, p. 78

64 MINISTERIO DE HACIENDA (2019) Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019. Libro Amarillo. Ministerio de Hacienda y Función Pública pp.75 y 76

65 AGENCIA TRIBUTARIA (2020) https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Vivienda/Tributacion_de_la_compra_de_la_vivienda/Deducción_por_inversión_en_vivienda_habitual/Adquisición_o_rehabilitación_de_la_vivienda_habitual.shtml

66 Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero y Real Decreto-ley 18/2012 de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero

67 Incluye la prestación de protección social en forma de ayudas en especie para ayudar a los hogares a sufragar los gastos de la vivienda; administración, funcionamiento o apoyo de esta protección social; prestaciones en especie, como pagos temporales o de larga duración para ayudar a los inquilinos con los gastos de alquiler, pagos para aliviar los gastos corrientes de vivienda de los propietarios ocupantes (es decir, para ayudar a pagar hipotecas o intereses), provisión de viviendas sociales o de bajo coste.

- En 2019, el aumento de los **beneficios fiscales** derivados de los **tipos reducidos de gravamen** se sitúa en torno a 618 millones de euros y se debe especialmente al trato que reciben las **Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI)**, cuyo beneficio fiscal en 2018 se estima en 261 millones de euros.
- Los Fondos de Inversión Inmobiliaria pagan solo un 1% del impuesto de sociedades y las SOCIMI un contundente 0%. Ambas tienen también bonificaciones del 95% en Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En cambio, las personas físicas que alquilen sus viviendas a entidades sociales para que puedan alojar a personas en situación de sin hogar están sujetas a tributar un 10% de IVA⁶⁸.
- Los programas aprobados en las últimas convocatorias de fondos FEDER (principalmente las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integraos – EDUSI) contemplaban actuaciones de erradicación de barrios vulnerables y chabolistas que no han llegado a ejecutarse en diversos casos.



PRINCIPIO N° 6

Objetivos y plazos basados en los derechos humanos

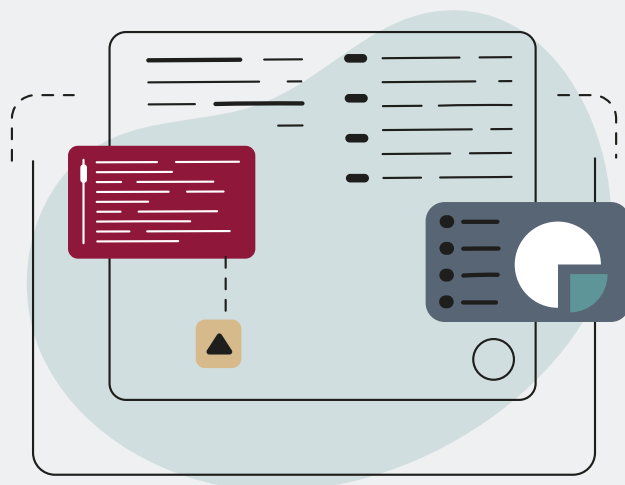
Propuestas de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada:

- Llevar a cabo la estrategia **en el tiempo más breve posible + objetivos y plazos razonables** (viables, pero reflejando la urgencia ante la que estamos). Es una obligación para los Estados en cumplimiento de Derecho Internacional de los DDHH.
- Objetivos ajustados a: **Nueva Agenda Urbana y Agenda 2030**
- **Indicadores de proceso:** informan sobre resultados en un período de tiempo (n° viviendas financiadas construidas, monto de subvenciones...)
- **Indicadores de resultados:** evalúan desde los titulares de DDHH (n° de hogares con agua y saneamiento; fotos, vídeos, testimonios, redes sociales...)
- **Indicadores estructurales:** evalúan los elementos integrantes del derecho -asequibilidad, seguridad tenencia...- (Impacto y alcance real en recursos efectivos ante la justicia...)
- **Obtención de datos:** beneficiarios/as (indicador de proceso), condiciones vivienda (indicador de resultado), y acceso a la justicia (indicador estructural) + situaciones (etnia, discapacidad, edad, género, origen, etc.)
- **Los objetivos y plazos han de ser diferentes** según grupos, regiones y lugares concretos.
- **Debe hacer frente a problemas sistémicos:** estigmatización, divisiones raciales, desigualdad en la prestación de servicios, en la adquisición de tierras o en su pérdida.
- Las definiciones que usemos para establecer objetivos y evaluarlos deben **venir de la experiencia directa**.

- Los datos estadísticos son importantes, pero no deben perder de vista los valores de los derechos humanos (y sus fines más amplios): el esfuerzo en obtener los datos no debe disuadir a los gobernantes de atender necesidades más complejas o situaciones emergentes.
- **(Añadimos): Es preciso que los objetivos incluyan enfoque de género de forma interseccional y de edad; la necesaria protección a la y la adolescencia (España ratificó la Convención de los Derechos del Niño) infancia implica tener en cuenta los tiempos de ejecución de objetivos concretos de inclusión residencial cuando se trata de familias con niños y niñas para no afectar el desarrollo infantil.**

Espejo en el Estado español:

- **Agenda Urbana Española**
 - Inclusión de objetivos y plazos basados en DDHH;
 - indicadores de seguimiento y actuación de dichos objetivos,
 - interrelación con la Agenda 2030 y Agenda Urbana Mundial.



PRINCIPIO N° 7

Rendición de cuentas y supervisión



Propuestas de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada:

- Los Estados tienen la obligación de **supervisar la aplicación y resultados de sus estrategias. Para ello, hay que designar un órgano específico.** Funciones: evaluación constante, identificar mejoras, recomendar modificaciones, pedir responsabilidades. Necesario: ser independiente, tener recursos suficientes y libertad para opinar y hacer recomendaciones en políticas públicas y legislación.
- **Ejemplos que ya existen:** defensorías del pueblo, instituciones de DDHH nacionales, órgano independiente del Gobierno, defensor de la vivienda etc.
- Puede tener el mandato de proveer de esta información y seguimiento a los órganos de NNUU
- **Con autoridad y recursos necesarios** para visitar en terreno, tener audiencias y reuniones, conocer la experiencia directa.
- **Uso de indicadores de DDHH, examen de obtención de objetivos y revisión de plazos, utilización de todos los datos pertinentes.** Teniendo también en cuenta el examen hecho por comunidades afectadas, sociedad civil medios de comunicación, organizaciones de defensa de los DDHH etc.

Espejo en el Estado español:

- **En el caso español**, como hemos visto, no hay una ley a nivel estatal que regule el derecho subjetivo a una vivienda adecuada; pero a pesar de ello **existen diferentes mecanismos internacionales de rendición de cuentas** ratificados por el Estado que pasan a formar parte

del ordenamiento jurídico interno por los artículos 10.2 y 93 de la Constitución Española y que hemos examinado a nivel internacional de Naciones Unidas (sus recomendaciones en el apartado 3 de este documento de notas introductorias).

➤ En el ámbito europeo:

- **España ha ratificado en 2021 la Carta Social Europea Revisada y el Protocolo de Reclamaciones Colectivas.** Ambos son también un mecanismo de rendición de cuentas en el marco del Consejo de Europa. Conviene señalar algunos ejemplos de dictámenes del Comité Europeo de Derechos sociales del Consejo de Europa dictados en el marco de los procedimientos de reclamaciones colectivas, como: *ERRC v. Bulgaria* (2006)⁶⁹; *ATD v France* (2006)⁷⁰; *FEANTSA v France* (2006)⁷¹; así como, las declaraciones de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa⁷².

- **En la actualidad tiene tres Reclamaciones Colectivas en curso.** En el caso de la 1ª de todas, sobre la Cañada Real, no ha accedido a llevar a cabo la petición de medidas cautelares por parte del Comité.

➤ Nuestra Defensoría del Pueblo se ha manifestado sobre el agua y ordenación del territorio⁷³ (2010), la vivienda protegida vacía⁷⁴ (2013), los deudores hipotecarios⁷⁵ (2012 y 2013), consumidores vulnerables energía eléctrica⁷⁶ (2017) y la vivienda protegida y el alquiler social en España⁷⁷ (2019) mediante informes monográficos e informes anuales.

- Además, hemos de resaltar la importante labor que ha venido realizando en el **monitoreo de los Dictámenes DESC** condenando a España, al requerir a los Ministerios de Justicia y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana respuesta sobre las recomendaciones hechas por el Comité DESC a España en los últimos años.

69 Disponible en: http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/decision-on-the-merits-by-the-european-committee-of-social-rights-18-october-2006.pdf

70 Disponible en: <https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:%22ESCPublicationDate%20Descending%22,%22ESCDclIdentifier%22:%22cc-33-2006-dmerits-en%22%22%7D>

71 Disponible en: <https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:%22ESCPublicationDate%20Descending%22,%22ESCDclIdentifier%22:%22cc-39-2006-dmerits-en%22%22%7D>

72 Disponible en: <https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty>

73 DEFENSOR DEL PUEBLO (2010) Informe sobre agua y ordenación del territorio. <https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/agua-y-ordenacion-del-territorio-marzo-2010/>

74 DEFENSOR DEL PUEBLO (2013) Estudio sobre viviendas protegidas vacías. <https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/estudio-sobre-viviendas-protegidas-vacias-marzo-2013/>

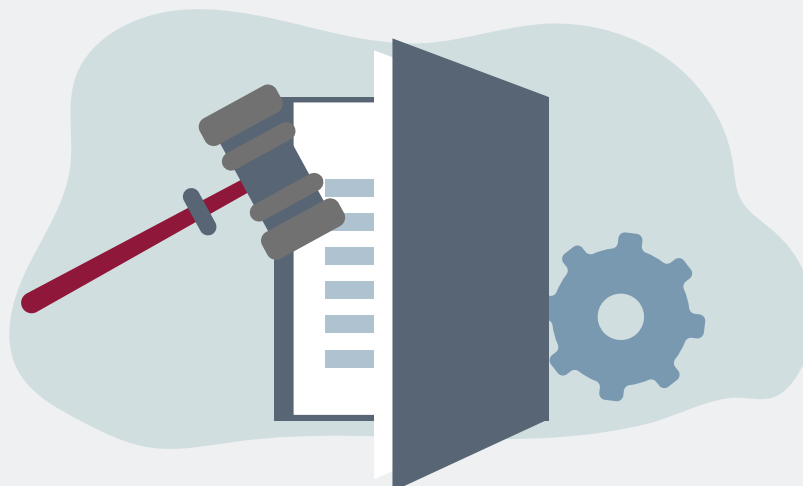
75 DEFENSOR PUEBLO (2012) Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del defensor del pueblo. <https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/crisis-economica-y-deudores-hipotecarios-actuaciones-y-propuestas-del-defensor-del-pueblo-enero-2012/> (2013) <https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/crisis-economica-y-deudores-hipotecarios-actuaciones-y-propuestas-del-defensor-del-pueblo-actualizacion-a-9-de-abril-de-2013-abril-2013/>

76 DEFENSOR PUEBLO (2017) Estudio sobre protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica suministro eléctrico para familias que, en un momento determinado, no pueden pagarlo. <https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/estudio-proteccion-consumidores-vulnerables-energia-electrica/>

77 DEFENSOR PUEBLO (2018) La vivienda protegida y el alquiler social en España <https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/la-vivienda-protegida-alquiler-social-espana/>

- Como mecanismo de supervisión interna, las **defensorías del pueblo a nivel autonómico y local** han realizado una importante labor de supervisión de las medidas en política de vivienda:
- **Síndic de Greuges** catalán con los siguientes informes: “Demora de la Administración en situaciones de emergencia residencial en Cataluña⁷⁸-2019”; “El derecho a la vivienda: cuestiones urgentes⁷⁹-2018”; “El acceso a una vivienda social-2015⁸⁰”, “La protección de los afectados por el índice de referencia de préstamos hipotecarios-2015⁸¹” o “El derecho a la vivienda: Obstáculos y límites-2007⁸²”)
- **Ararteko** en Euskadi (“Las políticas públicas de vivienda dirigidas a la población joven en la CAPV⁸³” en 2007; Informe-diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda por Lanbide⁸⁴” en 2017). Se ha realizado, por esta institución, una recopilación pública de resoluciones dictadas en materia de prestaciones de renta de garantía de ingresos (RGI) y prestación complementaria de vivienda (PVC).⁸⁵
- **Defensor del Pueblo Andalúz** Informe Anual (2016)⁸⁶ “La Pobreza de los Asentamientos de inmigrantes en Huelva”; “Informe especial al parlamento de Andalucía (2001) “El Alojamiento y la vivienda de los trabajadores inmigrantes en la Provincia de Huelva”⁸⁷; “Informe especial al parlamento Andalúz: Chabolismo en Andalucía” (2005)⁸⁸.

-
- 78 SÍNDIC DE GREUGES (2019) Demora de la Administración en situaciones de emergencia residencial en Cataluña http://www.sindic.cat/site/unitFiles/6746/Informe%20demora%20administracion%20situaciones%20emergencia%20residenciaL_cast.pdf
- 79 SÍNDIC DE GREUGES (2018) El derecho a la vivienda: cuestiones urgentes <http://www.sindic.cat/site/unitFiles/5064/Informe%20sobre%20vivienda%20cuestiones%20urgentes%20cast.pdf>
- 80 SÍNDIC DE GREUGES (2015) Informe sobre el acceso a una vivienda social http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3965/Informe%20sobre%20acces%20habitatge%20social_cast_ok.pdf
- 81 SÍNDIC DE GREUGES (2015) La protección de los afectados por el índice de referencia de préstamos hipotecarios http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3937/Informe%20IRPH_castella_ok.pdf
- 82 SÍNDIC DE GREUGES (2007) El derecho a la vivienda: obstáculos y límites <http://www.sindic.cat/site/unitFiles/2166/52-Habitatgefinal.pdf>
- 83 ARARTEKO (2007) Las políticas públicas de vivienda dirigidas a la población joven en la CAPV https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_281_3.pdf
- 84 ARARTEKO (2017) Informe-diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda por Lanbide https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf
- 85 Recopilatorio y resumen de las recomendaciones y sugerencias del Ararteko en materia de prestaciones de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda e ingreso mínimo vital durante el año 2023 | Ararteko
- 86 Defensor del Pueblo Andalúz. Informe anual (2016), disponible en: <http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/informe-anual-2016/index.php/revista-resumen-indice/02-indice/la-pobreza-de-los-asentamientos-de-inmigrantes-en-huelva>
- 87 Defensor del Pueblo Andalúz (2001). “El Alojamiento y la vivienda de los trabajadores inmigrantes en la Provincia de Huelva” disponible en: <https://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-alojamiento-y-la-vivienda-de-los-trabajadores-inmigrantes-en-la-provincia-de-huelva>
- 88 Defensor del Pueblo Andalúz (2005). “Informe especial al parlamento Andalúz: Chabolismo en Andalucía” disponible en: <https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/Chabolismo%20en%20andalucia.pdf>



PRINCIPIO N° 8

Velar por el acceso a la justicia

Propuestas de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada:

- La estrategia debe contener **mecanismos de reclamación efectivos** (revisión de vulneración del Derecho, establecer necesidades, llamar la atención sobre circunstancias donde no se ha atendido, señalar que normativas o políticas públicas han de cambiarse etc.)
- Tribunales + asistencia jurídica (**garantía de acceso e imparcialidad**).
- **Otros mecanismos extrajudiciales más accesibles:** defensorías del pueblo, comisionados de vivienda, consejos de vivienda comunitarios etc.
- Clave: atención de quejas y petición de rendición de cuentas a todos los actores.
- No sólo ante actuaciones concretas (desalojos forzosos, por ejemplo), **también la no acción** (falta de medidas para el logro efectivo del derecho a la vivienda etc.)

Espejo en el Estado español:

- **9 dictámenes⁸⁹ del Comité DESC (2015-2024)** de Naciones Unidas condenando a España por vulnerar el derecho humano a una vivienda adecuada (apartado 3). Respecto al acceso a la justicia, piden al Estado español que:
 - Adoptar medidas legislativas y/o administrativas pertinentes para garantizar que, en los procesos judiciales de desalojos del inquilinato, quienes demandan **puedan oponerse o presentar un recurso** con el fin de que el juez considere las consecuencias del desalojo y la compatibilidad de esta medida con el Pacto

89 E/C.12/55/D/2/2014; E/C.12/61/D/5/2015; E/C.12/66/D/37/2018; E/C.12/67/D/52/2018; EC/12/69/D/54/2018; EC/12/69/D/85/2018; E/C.12/71/D/127/2019; E/C.12/72/D/26/2018; E/C.12/73/D/134/2019

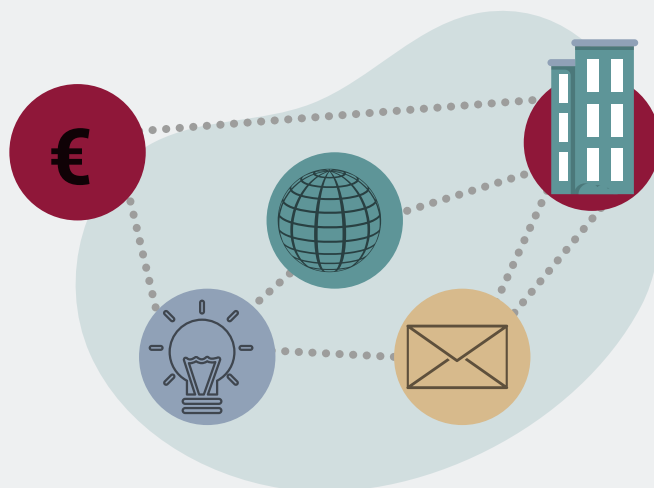
- Desarrollar un marco normativo que regule los desalojos de personas de sus viviendas, incorporando que las autoridades judiciales lleven a cabo un **examen de proporcionalidad** entre el fin perseguido por la medida y sus consecuencias sobre las personas desalojadas, así como la compatibilidad de esta medida con el Pacto, en todos los casos, incluidos aquellos de ocupación sin título legal
 - Asegurar que el marco normativo permita que las personas objeto de una orden de desalojo que pudiera exponerlas al riesgo de indigencia o a una violación de sus derechos de conformidad con el Pacto **puedan objetar la decisión ante autoridades judiciales**, u otra autoridad imparcial e independiente con el poder de ordenar el cese de la violación y de proporcionar un remedio efectivo, para que estas autoridades examinen la proporcionalidad de la medida a la luz del criterio para las limitaciones de los derechos reconocidos en el Pacto en los términos del artículo 4;
 - Establecer un **Protocolo para el cumplimiento de las solicitudes de medidas cautelares emitidas por el Comité**, informando a todas las autoridades pertinentes de la necesidad de respetarlas para asegurar la integridad del procedimiento.
- Desde 2017 y hasta noviembre de 2020 **135 Comunicaciones admitidas**⁹⁰ y resolviéndose ante el Comité DESC por vulneración de este derecho
 - Alquiler fraudulento: 25
 - Desahucio del inquilino por ejecución hipotecaria al arrendador: 4
 - Fin de Contrato: 1
 - Fin de Contrato Alquiler: 7
 - Impago Alquiler: 23
 - Impago Hipoteca: 3
 - Ocupación con consentimiento: 2
 - Ocupación sin título: 62
 - Recurso de Emergencia: 1
 - Vivienda social vendida: 7

90 NACIONES UNIDAS (2020) Table of pending cases before the Committee on Economic, Social and Cultural rights, considered under the optional protocol to the international covenant on economic, social and cultural rights (OP-CESCR) <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/PendingCases.aspx>

- El **Tribunal de Justicia de la Unión Europea** (TJUE) ha condenado de forma repetida al Estado español al lesionar los derechos de las y los españoles como consumidores (cláusulas contractuales, retroactividad de la nulidad etc.) y no cumplimiento de lo establecido en la Directiva 93/13/CE. Dejamos constancia del primer caso y con mayor trascendencia: Caso Aziz: Sentencia TJUE de 14 de marzo de 2013.
- El **Tribunal Europeo de Derechos Humanos** (TEDH) ha llevado a cabo varias intervenciones paralizando desalojos en base a los artículos 3 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos (tratos inhumanos o degradantes y respeto a la vida privada y familiar): Caso IVIMA (Madrid) Ap. 77842/12 A.M.B. y Otros v. Spain (12.12.2012); Caso Cañada Real (Madrid) Ap. 3537/13 Raji y Otros v. Spain (31.01.2013) y Caso Salt (Girona) Ap. 62688/13 Ceesay Ceesay y Otros v. Spain (15.10.2013).
- Nuestro **Tribunal Constitucional** ha declarado inconstitucional y por lo tanto, anulado, los artículos de las Leyes autonómicas de vivienda en relación a la protección de personas y familias especialmente vulnerables por estar en situación de amenaza de desahucio, y que proveían de la posibilidad de expropiación forzosa del uso de la vivienda, durante un período concreto de años y bajo determinadas condiciones de los titulares de las mismas (variable según la ley de referencia), así ha sido con:
 - Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra. Disposición Adicional Décima.
 - Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda del País Vasco. Artículo 9.4 y 74
 - Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda en la Comunidad Valenciana. Artículos 12 y 13.
 - Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda. Artículo 1.6
 - Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía. Disposición Adicional 1ª
 - Ley 4/2016, de 23 de diciembre de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social. Artículo 17.
- Desde 2017 el **Tribunal Supremo**:
 - **STS 1791/2017** - ECLI: ES:TS:2017: 1791 Anulación desahucio del inquilino de una vivienda de protección oficial de Madrid por expiración del plazo (que había sido autorizado por Audiencia Provincial de Madrid).

- **STS núm. 3373/2017** Dictamina la inexistencia de cosa juzgada en las ejecuciones hipotecarias anteriores a 2013: Improcedencia de la apreciación de la cosa juzgada cuando en el proceso ejecutivo previo no había posibilidad procesal para oponer el carácter abusivo de las cláusulas contractuales.
- **STS 463/2019** de 11 de septiembre, sobre nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado en los préstamos hipotecarios (concordancia con STJUE de 26 de marzo de 2019).
- Destacamos **STS núm. 1.797/2017** Anula una entrada para ejecución forzosa de resolución de lanzamiento por el IVIMA en domicilio en caso de ocupación con niños por no realizar el juez la debida ponderación de los intereses en juego. Llevando a cabo la aplicación de la doctrina del:
 - **Tribunal Constitucional**, expuesta en las sentencias 50/1995, de 23 de febrero, 69/1999, de 26 de abril y 188/2013, de 4 de noviembre, la resolución judicial por la que se autoriza la entrada en un domicilio debe estar debidamente motivada y, consecuentemente, debe cumplir la función de garantía de la inviolabilidad del domicilio.
 - Y del **Tribunal Europeo de Derechos Humanos**, en las sentencias de 24 de abril de 2012 (Caso Yordanova y otros v. Bulgaria) y de 17 de octubre de 2013 (Caso Winterstein y otros v. Francia), declara que cualquier persona en riesgo de sufrir la pérdida del hogar familiar debe tener la garantía de que la medida sea proporcionada y razonable, y que esa proporcionalidad y razonabilidad será valorada por un tribunal atendiendo a todos los factores involucrados de carácter social y personal.
- Establecimiento de **protocolos de coordinación**⁹¹ entre **Servicios Sociales y juzgados en los casos de desalojos forzosos** (Consejo General del Poder Judicial, Federación de Municipios y CCAA).

91 Como ejemplo el firmado por la Comunidad de Madrid <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Actividad-del-TSJ-Madrid/Protocolos-y-convenios/Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial-la-Comunidad-de-Madrid-y-la-Federacion-de-Municipios-de-Madrid-sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social-y-sobre-cesion-de-datos-en-los-procedimientos-de-desahucio-y-ejecucion-hipotecaria-2019->



PRINCIPIO N° 9

Aclarar las obligaciones de los actores privados y la regulación de los mercados financieros, de la vivienda e inmobiliarios

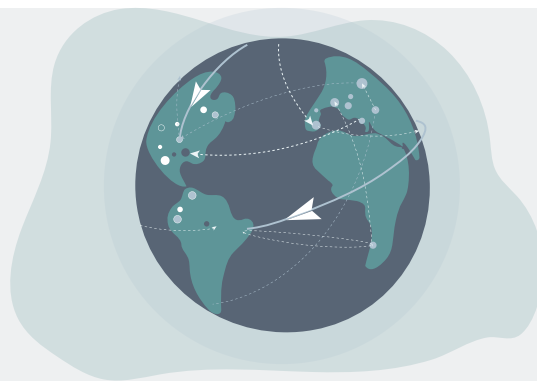


Propuestas de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada:

- El papel del sector privado en vivienda en todos los Estados es clave.
- Las estrategias de vivienda resultan ineficaces si ignoran ese papel clave.
- La inversión en vivienda es el sector empresarial más importante del mundo.
- Es necesario prestar atención a las **empresas y los DDHH** en la esfera de la vivienda.
- Las Estrategias de vivienda han de cumplir **los Principios Rectores sobre las Empresas y los DDHH de Naciones Unidas** (proteger, respetar y reparar – acceso a recursos efectivos y procedimientos de reclamación-). Pero estos principios no ofrecen la necesaria estructura global de regulación
- La realidad de la vivienda como bien económico y de inversión en todo el planeta (financiarización de la vivienda) **hace necesario afirmar la función social de la tierra y la vivienda para así frenar la especulación, creación de viviendas de lujo innecesarias, alianzas “privado-públicas” que no son supervisadas**, el extractivismo, el acaparamiento de tierras, la modificación agrícola tradicional, vulneración de pueblos indígenas etc.
- Es necesario promover, reconocer y proteger **formas alternativas de vivienda**, así como las actividades económicas informales.

Espejo en el Estado español:

- Regulaciones autonómicas sobre **pisos turísticos** (Galicia, Cataluña, Andalucía...)
- **Regulación de precios del alquiler** en Cataluña: Ley 11/2020⁹², de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda.



PRINCIPIO N° 10

Ejecutar proyectos de cooperación y asistencia internacionales



Propuestas de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada:

- Los desafíos de las estrategias de vivienda son de carácter mundial, y requieren adopción de **medidas internacionales**.
- PIDESC Artículo 2: **dimensión internacional del logro progresivo** de la efectividad de los DDHH. Requiere adopción de medidas, por cada Estado y en cooperación internacional con otros.
- Un Estado incumple su obligación internacional de DDHH en materia de vivienda **cuando su asistencia para el desarrollo da lugar a la violación del derecho a la vivienda en otro país**.
- A menudo la asistencia al desarrollo no solo no facilita, obstaculiza la efectividad del Derecho a la vivienda (**proyectos que provocan desalojos, por ejemplo**).
- Además, hacen falta medidas ante: **instituciones financieras** que exigen medidas de desregulación o de austeridad; **conversión en bienes inmuebles en productos comercializados internacionalmente** (financiarización de la vivienda); tratados de libre comercio que no reconocen **DDHH** como límite en impugnaciones de los inversores; extractivas, empresas agrícolas y mercado inmobiliario que producen destrucción y desplazamiento de viviendas, comunidades y medios de subsistencia...
- Necesidad de un **Registro Financiero Mundial** (paraísos fiscales- evasión tributaria).

Espejo en el Estado español:

- **Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)**: ítem de Estructuras sociales y servicios: Políticas de vivienda y gestión administrativa.
- Seguimiento y participación en sesiones del Grupo de trabajo de Naciones Unidas intergubernamental de composición abierta sobre **las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos (OEIGWG)**.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) está formada por las siguientes redes y entidades:

19 redes autonómicas:

EAPN-Illes Balears-Xarxa per la Inclusió Social • Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social • Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión • Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en Asturias • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi • Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social • Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Extremadura • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Melilla • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Cantabria • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Ceuta • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español de la Comunidad Autónoma de Galicia • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja • Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social • Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya • Xarxa per la Inclusió social de la Comunitat Valenciana

Y 22 entidades estatales:

Accem • Acción Contra el Hambre • Cáritas Española • Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) • Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) • Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) • Cruz Roja Española • Federación de Mujeres Progresistas (FMP) • Fundación Adsis • Fundación Cepaim • Fundación Cruz Blanca • Fundación Esplai • Fundación Secretariado Gitano • Hogar Sí • Médicos del Mundo • Movimiento por la Paz (MPDL) • Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) • Plena Inclusión • Provivienda • Red Acoge • Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD) • YMCA



Financiado por:



Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES)

Calle Melquiades Biencinto, 7 – 2ª Planta. 28053 Madrid

Tel. 91 786 04 11

eapn@eapn.es • www.eapn.es

